

Los antecedentes de un conflicto

Santaliestra es un pueblecito de apenas 100 habitantes en la Baja Ribagorza Aragonesa, situada pocos kilómetros aguas arriba de Graus, a orillas del río Ésera, afluente del Cinca.

Ya en el siglo XIX, Joaquín Costa, nacido justamente en Graus, promovió el gran proyecto del Canal de Aragón y Cataluña (CAC), que, naciendo en el embalse de Barasona con 92 hm³ (llamado hoy en su honor «Joaquín Costa»), y aprovechando el alto nivel de regulación natural del Ésera, acabaría regando más de 100.000 hectáreas en la comarca de la Litera, a caballo entre las provincias de Huesca y Lérida. En aquellos años, el proyecto se diseñó para cubrir los objetivos del momento: producir con garantía cereales de invierno (trigo, cebada, etc.) superados los tiempos de escasez, jalonados por períodos de hambruna, y en la medida que los mercados fueron demandando otros productos con mayores necesidades de riego, como maíz, alfalfa, frutas etc., la capacidad reguladora del embalse de Barasona empezó a ser insuficiente.

Ante esta situación se planteó la construcción del embalse de Campo, cuyo proyecto, redactado en 1976, suponía inundar este pueblo, con varios miles de habitantes. Por primera vez en el Pirineo, y todavía en tiempos de Dictadura Franquista, se generó un activo movimiento de oposición que acabaría colapsando el proyecto, pasándose a proponer en 1990 otro embalse más pequeño, el de Comunet. En esta ocasión, y aunque no se inundaba ningún pueblo, un nuevo movimiento de oposición en la Baja Ribagorza, esta vez en las cercanías de Graus, acabaría bloqueando el proyecto, a cambio de una tercera alternativa: el embalse de Santaliestra, en la cerrada llamada de San Martín, que sería firmada a regañadientes en 1992, como mal menor, por los ayuntamientos de la zona. El proyecto quedaría luego olvidado durante varios años.

Desde los tiempos del embalse de Campo, el escepticismo fue creciendo entre los regantes del CAC, pasándose a pensar en otras soluciones. Una de ellas era recurrir al Noguera Ribagorzana, río limítrofe entre Aragón y Cataluña. Se chocaba con las grandes compañías eléctricas que tenían copados los derechos concesionales, con el valle transformado en un rosario de embalses hidroeléctricos. Finalmente en 1992 se firmaría el Pacto de Piñana por el cual, en años de sequía, se retendrían caudales en el embalse de Santa Ana, indemnizando a las eléctricas por parte de la Diputación General de Aragón y de la Generalitat al 50%, para así

garantizar los riegos en la zona baja del CAC, que corresponde a Lérida y una pequeña zona en Aragón (Fraga), a través del Canal de Enlace.

Más allá del relativo alivio aportado por el Pacto de Piñana en la zona baja, lo que fue cambiando fue el espíritu con el que generalmente se ha abordado este tipo de problemas entre los regantes. Se fue pasando de la tradicional actitud plañidera en petición de nuevas obras a cargo del Estado, a una actitud más empresarial, presidida por el enfoque de «¿qué puedo hacer con mis medios para resolver mis problemas?». El resultado ha sido al cabo del tiempo un proceso de modernización del regadío bajo la iniciativa de los propios regantes, que aun disfrutando de notables subvenciones públicas (del 30-40%), se han involucrado en notables esfuerzos financieros y organizativos. Hoy está modernizado en torno al 50% del polígono de riego, habiéndose construido decenas de balsas de regulación en tránsito (a lo largo de los canales del sistema) que han permitido, no sólo disponer de más caudales regulados, sino pasar del riego a turno al riego a la demanda, flexibilizando el sistema y consiguiendo con el riego a presión importantes ahorros (en torno al 30%) y mejoras en la eficiencia. Todo ello ha arrastrado un proceso de activación empresarial, diversificándose los cultivos hacia productos más rentables (fundamentalmente frutales) y menos dependientes de las subvenciones europeas. Hoy los resultados son sumamente interesantes. Si comparamos la situación de este sistema con el vecino de Riegos del Alto Aragón, en Monegros, nos encontramos que el CAC, con el 40% menos de caudales por hectárea, produce más del 50% más y genera más del 70% más de trabajo.

El conflicto de Santaliestra

Desgraciadamente, cuando se tenía ya mediado este exitoso proceso de modernización, y a pesar de que aún estaban pendientes importantes actuaciones para completarlo, en 1996 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reactiva el proyecto de Santaliestra. Sin embargo, el gobierno, saltándose el acuerdo firmado, decide cambiar la ubicación de la presa, pasando a la cerrada situada 800 metros aguas arriba de Santaliestra. La nueva ubicación permitiría un posterior recrecimiento, contemplado en los planes de la CHE, de nuevo al margen del acuerdo firmado con los ayuntamientos. Este hecho permitió al Ayuntamiento de Santaliestra interpretar como roto el acuerdo que años antes se habían visto obligados a firmar, como mal menor frente a la amenaza de Comuret. Se abrió así de nuevo el conflicto en la Ribagorza, pero esta vez en un contexto histórico notablemente diferente, en el que los embalses habían pasado a ser cuestionados por su dudosa rentabilidad económica y sus graves impactos ambientales, reforzando los argumentos sociales de luchas anteriores.

Con la entrada al gobierno del PP, el proyecto de Santaliestra se activa, fruto del paquete de acuerdos con Convergencia i Unió que impone una alta prioridad a la ejecución de las obras. Dos son los objetivos perseguidos por Jordi Pujol: por un lado rescatar los caudales expropiados a las eléctricas catalanas en el Pacto de Piñana y por otro liberar caudales del Noguera, que se destinarían a dotar los riegos del Alguerri-Balaguer. En definitiva, además de generarse nuevos recursos de turbinado eléctrico a pie de presa, Santaliestra liberaría los compromisos de caudales del Noguera quedando todo el Canal de Aragón y Cataluña atendido desde el Ésera.

En 1997 la entrada de COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases) en el conflicto supone un giro importante al abrirse un frente técnico, que permitiría desvelar los verdaderos objetivos del proyecto que hasta entonces se centraban aparentemente en mejorar las dotaciones de la zona alta del CAC, en Aragón, y dotar caudales para 7000 nuevas hectáreas en la Litera Alta. Pero sobre todo aportaría un primer análisis geológico del Prof. Casas, des-de la Universidad de Zaragoza, que demostraba el alto riesgo que supondría la presa para las vidas de quienes vivieran aguas abajo. En él se demuestra la fuerte inestabilidad de una de las laderas del vaso del embalse que, unida a la notable sismicidad de la zona y al llenado del embalse, podría generar un gran deslizamiento sobre el mismo, lo que generaría una enorme ola sobre el valle aguas abajo. El diagnóstico es similar al de Vajont en la frontera italo-francesa, donde el 9 de octubre de 1963 el pronosticado deslizamiento sobre el embalse, recién lleno, se produjo, levantando una ola de 100 metros que, superando la presa, arrasó varios pueblos con el balance de casi 3000 personas muertas. Posteriores informes de la Universidad Autónoma de Barcelona, de CIVILTEC, uno de los gabinetes más prestigiosos en España sobre la materia y del propio MIMAM (mantenidos por el Ministerio en reserva), ratificaron y ampliaron la magnitud de la posible catástrofe.

El proceso jurídico

Se conoció igualmente que la Comisión de Seguridad de Presas del propio Ministerio había emitido un informe negativo, que había sido secuestrado del expediente para aprobar apresuradamente el proyecto tras firmarse los acuerdos de gobernabilidad entre el PP y CiU. La confirmación de este grave hecho motivó, más allá de los contenciosos administrativos, la apertura de un frente jurídico por la vía penal, que a fecha de hoy sigue progresando contra los entonces Secretario de Estado de Aguas, D. Benigno Blanco, Director General de Obras Hidráulicas, D. Carlos Escartín y Presidente de la CHE, D. Tomás Sancho.

El reconocimiento y aportación de documentos ante los tribunales, por parte de los técnicos responsables de riesgos geológicos en el Instituto Tecnológico Geominero y de los de la Comisión de Seguridad de Presas, acabaría con el cese de estos expertos e incluso la disolución de la citada Comisión encargada de velar por la seguridad de las presas en España.

Ante la clamorosa falta de estudios técnicos y la presentación de las citadas pruebas comprometedoras contra estos altos cargos del Ministerio, se respondió con una declaración de «ocupación urgente», expropiando la zona y forzando la entrada de maquinaria, a pesar de la oposición unánime de los vecinos, con el argumento de que se precisaban «complementar ciertos estudios técnicos». La presencia masiva de unidades antidisturbios de la Guardia Civil durante varias semanas, con las correspondientes acciones represivas contra los vecinos, desembocaron en otra oleada de acciones judiciales contra éstos, a pesar del carácter escrupulosamente no violento de sus protestas.

El día anterior a las últimas elecciones, el gobierno, tras haberse negado a que los estudios técnicos fueran siquiera supervisados por expertos de la confianza de los afectados, declaró que no existía riesgo alguno y se apresuró a licitar las obras, que recientemente han sido adjudicadas, al tiempo que presentaba tales tramitaciones ante los tribunales como argumentos a su favor.

La movilización ciudadana

En estos años el proceso de movilización en la zona ha sido tan duro como difícil. En 1997 se constituye ACUDE (Asociación Cultural de Defensa del Ésera) que ha ido organizando múltiples asambleas, jornadas, debates y conferencias en toda la co-marca, desde Graus a Benasque. Más allá de la activa participación en las manifestaciones con COAGRET en Madrid, Huesca y Zaragoza y de ser parte destacada en las movilizaciones pirenaicas en Jaca, Biscarrués y Boltaña, ACUDE desarrolló una gran actividad aportando decenas de personas a la Huelga de Hambre de 21 días que se llevó a cabo en Aragón en 1999 contra los nuevos embalses, ha promovido concentraciones y manifestaciones ciudadanas en la comarca, siendo particularmente relevante la que reunió a más de 3000 personas en marcha de Santaliestra a Graus en 1998 y promovió una concentración ante la Generalitat en Barcelona. Pero sobre todo las gentes de Santaliestra y ACUDE conmovieron a la opinión pública en el año 2000, por su imaginación y decisión, en la larga lucha no violenta que mantuvieron con las unidades antidisturbios de la Guardia Civil, intentando bloquear durante semanas el paso de las máquinas sobre sus tierras. El actual proceso judicial contra D^a María Campo, una abuela enferma de 73 años y poco más de 50 kilos de peso, por el pretendido delito de lesionar seriamente a tres guardias civiles jóvenes y fuertes, con sus en tomo a 90 kg de peso cada uno, pertenecientes a las unidades de élite antidisturbios, ha levantado el escándalo en la opinión pública.

En este tiempo los esfuerzos de la administración por aislar a ACUDE no han cesado, siendo particularmente preocupante el intento de utilizar fondos europeos para comprar voluntades en la comarca. Del orden, de 2000 millones de los fondos de cohesión, ofrecidos en proyectos a los diversos alcaldes, uno a uno, a cambio de su firma en favor del embalse. Denunciado el hecho ante Bruselas, la Comisión ha abierto expediente informativo cuyo desenlace será clave en lo que se refiere a este proceso de compra de voluntades y dignidades en la comarca.

Forma de contacto:

ACUDE

Tel.: 696028753

e-mail: sdgee@astor.urv.es